

Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, bajo el Rol Interno del Tribunal N° 30-2024, RUC N° 2.301.050.043-5, se llevó a efecto el juicio oral que concluyó con la sentencia definitiva de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veinticuatro y en que se condenó a:

- Joshua Adolfo Salgado Salgado, por su participación en calidad de autor en el delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales y accesorias legales;

- Juan Enrique Hormazabal Puentes, por su participación en calidad de autor de los delitos consumados de tenencia de arma de fuego convencional, tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones, a una pena única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales;

- Joshua Adolfo Salgado Salgado y Juan Enrique Hormazabal Puentes, por su participación en calidad de autores en el delito consumado de tráfico de armas, a sufrir, cada uno, la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo (*sic*) y accesorias legales.

En dichos antecedentes, las defensas de los sentenciados dedujeron sendos recursos de nulidad, los que se conocieron en la audiencia pública de



fecha doce de noviembre último, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, tal como consta del acta respectiva.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a propósito del examen del recurso presentado, necesario resulta detallar los hechos que se encuentran asentados en el fallo de instancia y que están fijados en el motivo décimo segundo del fallo que se censura. Al efecto, los jueces del tribunal oral establecieron la concurrencia de lo siguiente:

“A raíz de una investigación, llevada a cabo por Fiscalía, conjuntamente con Policía de Investigaciones, se determinó que el imputado Joshua Salgado Salgado, se dedicaba al tráfico ilícito de estupefacientes, utilizando para ello, su domicilio ubicado en Fabrica de Tejas N°1794, Traiguén. Además de lo anterior, utilizando medidas intrusivas, tales como interceptación de las comunicaciones telefónicas el imputado Joshua Salgado Salgado, se determinó que se dedicaba a la adquisición de armamentos y municiones.

Es así, que con fecha 18 de agosto de 2023, en horas de la tarde, el imputado Joshua Salgado Salgado, toma contacto con el imputado Juan Hormazábal Puentes, a través de comunicación telefónica, en la cual, le solicita armas de fuego, ofreciéndole el imputado Juan Hormazábal Puentes, dos armas, una larga y un arma corta, aceptando dicho ofrecimiento el imputado Joshua Salgado Salgado.

Asimismo, el día 27 de septiembre de 2023, a raíz de una diligencia de entrada registro e incautación, debidamente autorizada por el juzgado de Garantía de Traiguén; el imputado Joshua Salgado Salgado, fue sorprendido manteniendo en su poder, en posesión y guarda, la cantidad de 13 gramos de clorhidrato de



cocaína, lo anterior al interior del domicilio ubicado en Fabrica de Tejas N°1794, Traiguén, en una dependencia destinada a dormitorio.

Dentro de la misma diligencia, el día 27 de septiembre de 2023, en horas de la tarde, el imputado Juan Hormazábal Puentes, fue sorprendido manteniendo en posesión y guarda, al interior de su domicilio, ubicado en calle General Pinto N°805, comuna de Traiguén, armas y municiones.

En ese contexto, en una habitación destinada a dormitorio, se encontró: 01 revolver marca Iver Johnson serie N°57627, 36 cartuchos de escopeta calibre 16, 21 cartuchos calibre 38 y 02 cartuchos calibre 22. En otra habitación, ubicada al costado norte del inmueble, se encontró: 01 revolver marca Taurus, calibre 38 especial serie K238896, 06 cartuchos 38 especial.

En una habitación ubicada al costado oriente del inmueble, se encontró: 01 escopeta de doble cañón serie 44276 y 01 escopeta calibre 12, con su número de serie borrado, la cual mantenía en su poder, a cambio de un préstamo de dinero realizado a un tercero.

Especies todas, que el imputado mantenía en su poder sin mantener la autorización de autoridad competente”.

Lo anterior fue calificado jurídicamente de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en los artículos 4 y 1 de la Ley N°20.000; tenencia ilegal de arma prohibida, tenencia ilegal de arma convencional, tenencia ilegal de municiones, previstos y sancionados en los artículos 3, 9, 10 y 13 de la Ley N°17.798, respectivamente, y; tráfico de armas, ilícito previsto y sancionado en el artículo 10°, en relación con el artículo 2°, también de la Ley N°17.798.



SEGUNDO: Que, por parte de la defensa del sentenciado Joshua Salgado Salgado se dedujo un recurso de nulidad el cual basa en la causal del literal a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en los artículo 5° inciso 2° y 19 número 3°, inciso 6° de la Constitución Política de la República; artículo 7° numeral 2° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículo 9° numeral 1° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y artículos 77, 180, 234, 248 y 257 del Código Procesal Penal, artículos 1°, 4° 41 y 43 de la Ley 20.000.

En un aspecto previo, la recurrente centra su reproche en el hecho que uno de los medios probatorios, como lo es la pericia química, fue obtenida con posterioridad al cierre de la investigación, lo cual conforma un vicio debido a que los elementos de incriminación con los que cuenta el acusador deben estar disponibles con anterioridad a dicho hito procesal, sin embargo, refiere que el fallo valora de forma positiva dicho insumo, siendo ese el momento en que el vicio se consolida, de tal manera que el recurso incoado, en su concepto, no requiere preparación en los términos que ordena el inciso primero del artículo 377 del Código Procesal Penal.

En cuanto al fondo, detalla que el protocolo de droga correspondiente a la pericia química, la cual determinó que la sustancia incautada en el domicilio el día de la detención era clorhidrato de cocaína y que ésta tenía una pureza del 20%, fue ejecutada con posterioridad al cierre de la investigación, transformándose, por ende, en una prueba obtenida de manera ilícita por parte del ente persecutor, toda vez que se trata de una diligencia investigativa que, sin perjuicio de haber sido encargada por el Ministerio Público durante el periodo de la investigación, fue



realizada o ejecutada después del cierre de la misma en una clara infracción a las normas de carácter legal que establecen el debido proceso.

En tal sentido, asegura que, en cuanto al periodo en el que deben desarrollarse las diligencias investigativas como las que se establece en el artículo 43 de la Ley N°20.000, en relación con los artículos 247 y 248 del Código Procesal Penal, sólo pueden realizarse hasta antes del cierre de la investigación, por lo tanto, cualquier prueba producida después de ese evento no puede ser valorada por el tribunal de fondo.

En ese orden de consideraciones, avizora una infracción a la garantía fundamental del debido proceso, el cual se asegura tanto en la Constitución Política de la República, como en tratados internacionales y, por cierto, constituye una vulneración concreta y sustancial de la misma

Así las cosas, solicita que se anule el juicio y la sentencia, reestableciendo la causa al estado de realizarse un nuevo juicio oral, excluyéndose del auto de apertura las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y que precisa en el recurso.

TERCERO: Que, en un alcance inicial, cabe recordar que el recurso de nulidad, arbitrio de derecho estricto, establece ciertas exigencias para su interposición. Entre ellas, en lo que interesa, destaca la necesidad que el mismo sea preparado, lo cual está previsto en el artículo 377 del Código Procesal Penal, en cuanto establece, bajo el rótulo Preparación del recurso: *“Si la infracción invocada como motivo del recurso se refiriere a una ley que regule el procedimiento, el recurso sólo será admisible cuando quien lo entablare hubiere reclamado oportunamente del vicio o defecto.*



No será necesaria la reclamación del inciso anterior cuando se tratare de alguna de las causales del artículo 374; cuando la ley no admitiere recurso alguno contra la resolución que contuviere el vicio o defecto, cuando éste hubiere tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se tratare de anular, ni cuando dicho vicio o defecto hubiere llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia.”

En el caso de autos, conforme a lo señalado en el motivo anterior, la infracción invocada se asocia al hecho de haberse valorado ciertas probanzas que fueron incorporadas en forma posterior al cierre de la investigación. Ahora bien, en la forma como se describe el vicio, lo cierto es que la supuesta infracción se consolida desde el momento en que los elementos en cuestión son incorporados en el auto de apertura de juicio oral, resolución que contiene, entre otros asuntos, las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral. En este sentido, a diferencia de lo que sostiene el articulista, existe una oportunidad previa para reclamar el defecto que denuncia, cual es la audiencia de preparación pues, no ha sido controvertido el hecho que el acusador fiscal indicó los medios de prueba en su acusación, de tal manera que la defensa ya estaba al tanto de dichos elementos de convicción que ahora pretende su exclusión y debió, por tanto, protestar en un momento anterior a la audiencia de juicio oral.

En tal sentido, resulta inconcuso el hecho que existió una falta de preparación del recurso, lo cual es una exigencia de éste y, por ello, las reflexiones previas bastan para desestimar este capítulo, no obstante, estando en estado de conocer sobre el fondo del asunto, se procederá a analizar el mismo.



CUARTO: Que, en reiterados pronunciamientos, esta Corte ha señalado que es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 19, N° 3°, inciso sexto de la Carta Fundamental, confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En una misma dirección, en torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso, este Máximo Tribunal ha sostenido que, a lo menos, lo constituye un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes que entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que se dicten veredictos motivados o fundados, etcétera.

Así, entonces, no hay discrepancias en aceptar que, sin duda, el derecho al debido proceso está integrado por la obligación de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente, de acuerdo a una serie de actos de carácter formal y preestablecidos, que den garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal, la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del afectado. Este interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la promoción de la acción penal y la carga de



probar la culpabilidad del inculcado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las partes y desinteresada respecto del objeto de la causa.

QUINTO: Que, por otra parte, los elementos del debido proceso también han sido desarrollados mediante la incorporación al procedimiento de una serie de resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el momento en que se le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos que materialicen el respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la igualdad de armas, entre los cuales se encuentra el ser oído, que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los hechos y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la formalización y en la acusación, aspectos —entre otros— que han sido consagrados en los artículos 8°, 93, 229, 259, 270 y 341 del Código Procesal Penal.

SEXTO: Que, en relación con el agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte también ha resuelto, uniformemente, que su agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el



defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (entre otras, SCS N°s 2.866-2013, de 17 de junio de 2013; 4.909-2013, de 17 de septiembre de 2013; 21.408-2014, de 8 de septiembre de 2014; 4.269-2019, de 25 de marzo de 2019; 76.689-2020, de 25 de agosto de 2020; 92.059-2020, de 8 de septiembre de 2020; y, 112.392- 2020, de 3 de noviembre de 2020).

Que, en este entendido, para la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal.

SÉPTIMO: Que, luego de lo explicado, cabe mencionar que la incorporación del peritaje relacionado con el protocolo de la droga no puede catalogarse como una infracción “sustancial” a una garantía constitucional, en este caso, del debido proceso, desde que no afectó el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado. En efecto, tal como se detalla en el recurso, la diligencia cuestionada fue decretada con anterioridad al cierre de la investigación, siendo incluida luego en la acusación del Ministerio Público y, por ende, era conocido de antemano su ofrecimiento como prueba para el juicio oral, por la defensa. Es decir, no se trata de la incorporación de una prueba solicitada con posterioridad al cierre



de la investigación, máxime si al momento de verificarse la audiencia de preparación de juicio oral, esto es, el dos de julio del año en curso, ya toda la prueba de cargo estaba en conocimiento de los intervinientes y a disposición de ellos desde el dieciséis de abril del mismo año.

En esas condiciones, no se verifica la ilicitud planteada, la que por cierto, como ya se dijo, no fue reclamada en su oportunidad, lo que conduce al rechazo del primer capítulo de nulidad.

OCTAVO: Que, en subsidio, la misma defensa postuló la causal de nulidad prevista en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, lo cual relaciona con el delito de tráfico de armas.

Sobre el particular, denuncia que, a través del contrainterrogatorio del funcionario de la Policía de Investigaciones, don Francisco Alvarado, se pudo verificar que la investigación se inició por una denuncia anónima y solo en base a ella, se realizaron una serie de medidas intrusivas. En ese sentido, cuestiona que la sentencia, sin un sustento fáctico probado, lleva a concluir que existió una convención o acuerdo consistente en que este último le entregó o traficó una escopeta y un revólver con el coacusado para que este solucionara unos problemas que había tenido con unos sujetos apodados o de apellidos Conejero, sin determinar si era real o no la existencia de los problemas que habrían motivado la supuesta compra.

En tal sentido, considera que no fue acreditado el supuesto acuerdo de venta de armas con el otro imputado, el cual no se confirmó que se haya materializado y solo se toma de una escucha telefónica de fecha 18 de agosto que



conectan con un operativo que se realiza el 26 de septiembre, sumado al hecho que, en el domicilio del co – imputado, el que supuestamente adquirió las armas, no fueron halladas las mismas.

Conforme a lo expuesto, denuncia la infracción al deber de fundamentación de la sentencia, dando cuenta que ninguno de los postulados en que se basan las conclusiones son acertados, de tal forma que no existe una razón suficiente con el estándar de convicción enunciado en el artículo 340 del Código Procesal Penal.

En consecuencia, solicita que se anule el juicio y la sentencia condenatoria por el delito de tráfico de armas en contra de Joshua Adolfo Salgado Salgado, por la causal de nulidad del artículo 374 letra e), motivo absoluto de nulidad, ordenando retrotraer la causa al estado de realizarse ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no inhabilitado que corresponda una nueva audiencia de juicio oral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal.

NOVENO: Que, por resultar similares los argumentos expuestos, cabe hacer referencia al recurso de nulidad presentado por la defensa del sentenciado Juan Hormazábal Puentes, quien dedujo, en forma principal, el motivo de nulidad contemplado en el artículo 374, letra e), en relación con el artículo, 342, letra c) y el artículo 297, inciso primero, todas disposiciones del Código Procesal Penal.

En este arbitrio, postula la defensa el hecho que la sentencia impugnada infringe las reglas de la lógica, especialmente, el principio de la razón suficiente, en particular sobre el delito de tráfico de armas. En este caso, considera que el tribunal ha sustentado el delito, tan solo con una escucha telefónica y el relato de un funcionario de la Policía de Investigaciones, concluyendo que, con ese solo hecho, se verificaría la “convención”.



Además, hace suyos los argumentos del voto de minoría en este aspecto, en cuanto al hecho que es insuficiente la prueba rendida en esta causa para acreditar el delito de tráfico de armas pues, en concepto del disidente, hay una distancia temporal que no permite vincular las armas encontradas con aquellas que se supone buscaba traficar uno de los encausados y, además, en poder del co – imputado, no se encontró armamento.

Con lo expuesto, solicita que se acoja el recurso, por la causal principal invocada y conforme a lo establecido en el artículo 386 del Código Procesal Penal, se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

DÉCIMO: Que, en este punto, resulta esencial revisar lo resuelto en los considerandos décimo séptimo a décimo noveno, razonamientos en los cuales, el fallo censurado, entrega las razones asociadas a la decisión de considerar acreditado el delito de tráfico de armas. Al efecto, es posible observar cómo el tribunal oral, en base a las probanzas aportadas por los acusadores, sustenta la consumación de uno de los verbos rectores del tipo penal, el cual es suficiente para tener por configurado el ilícito respectivo. En este sentido, los cuestionamientos vienen dados por la supuesta falta de corroboración acerca de las *convenciones* a que alude el tipo penal, lo que el tribunal explica en el motivo décimo noveno y en donde se resuelve, acertadamente, el hecho que la ley no define lo que ha de entenderse por “*celebraren convenciones*”, de tal manera que, para la configuración de dicha conducta deben ponderarse los elementos probatorios que se rinden a su respecto y que den cuenta de aquello, al igual que



el contexto en que éste se produce. En este caso, ciertamente han valorado de manera adecuada los sentenciadores de instancia, no solo con los dichos del funcionario policial al que hacen referencia los recurrentes sino que ello lo vinculan con la prueba material consistente entre las escuchas telefónicas de los inculcados, los que, unidos, permiten corroborar la concurrencia del acuerdo de voluntades que prescribe el legislador penal y que, por el marco ilícito en que se celebra – el contexto –, en la mayoría de las ocasiones, éste se ejecuta en un lenguaje críptico. En ello, no es esperable una conversación similar a lo que sostienen dos comerciantes, importadores, exportadores, fabricantes y consumidores habituales de especies o sustancias sujetas a control de la ley de la especialidad sino que ella se encuadra en un coloquio que sostienen personas que no cuentan con las autorizaciones para ejercer dichas actividades específicas, quienes buscan encubrir sus reales intenciones y por ello es que emplean un lenguaje encriptado para abarcar su velada empresa delictiva, lo que sucede, precisamente, en este caso, en donde se vislumbran las características ciertas de un acuerdo o convención delictiva.

Por otra parte, lo referente a la vinculación temporal que podría requerirse entre las escuchas telefónicas y la diligencia de entrada y registro, al igual que el hallazgo de especies sujetas al control de la ley sobre control de armas en poder del acusado Salgado Salgado, lo cierto es que ninguna de dichas circunstancias dice relación con alguna exigencia del tipo penal sino que, tal como lo presenta el voto disidente, ello dice relación con un aspecto de convicción de quien, como se dijo, evaluó otros aspectos asociados al contexto de la conducta penalmente reprochable pero que, para la posición de mayoría, resultaron insuficientes para



controvertir las conclusiones a las que arribaron, las que se basaron en sendos elementos de corroboración usados por los sentenciadores para apoyar sus conclusiones pues, por otro lado, en realidad, lo pretendido por las defensas es una nueva ponderación del insumo probatorio que, por cierto, resultó una tarea ejecutada de manera acertada por los sentenciadores, quienes, sustentan sus conclusiones en respeto de las reglas de la lógica, de las máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados.

Así, para cerrar este tópico, es importante mencionar que el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales – artículo 36 de Código Procesal Penal –, se relaciona con el principio de la razón suficiente y, en la especie, se constata que el tribunal del grado entrega fundamentos en torno a sus conclusiones, las que descansan en probanzas ciertas que conducen a las conclusiones arribadas, ello en pleno respeto de lo mandado por el artículo 297 del Código Procesal Penal.

En consecuencia, el presente capítulo de nulidad deberá ser descartado.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, la asistencia letrada del sancionado Juan Hormazábal Puentes, de manera subsidiaria, dedujo la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal respecto de los hechos en donde se le imputa haber tenido participación y que fueron calificados por los sentenciadores como tenencia de arma de fuego convencional, tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

En este extremo, plantea que el tribunal le imputó dos armas como parte de los aludidos delitos, en circunstancias que una era parte de una herencia recibida y, la otra, era de un familiar, lo cual conforma un error de derecho, en



circunstancias que se trata de hechos que se sancionan administrativamente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, inciso decimoquinto de la Ley 17.798, ello por no haber efectuado las respectivas inscripciones.

En concreto, solicita que, únicamente, se anule la sentencia, dictándose una de reemplazo, en donde se absuelve al inculpado de los delitos de tenencia de arma de fuego convencional, tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

DUODÉCIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto, el defensor pretende desvincular las armas encontradas en el domicilio del aludido acusado, aseverando que solo se trata de una infracción administrativa relacionada con la falta de inscripción que exige el artículo 5° de la Ley N°17.798 y por ello solo se le debió sancionar con una multa administrativa.

Sobre esta alegación, el tribunal hace referencia a las probanzas de la defensa en el motivo décimo y de las que se hace cargo en el considerando vigésimo primero, en donde se establece que dicha alegación no fue demostrada, lo cual dimana de la circunstancia que, aun cuando se alegó esta suerte de falta administrativa por no haber incluido las armas en el trámite de posesión efectiva y su correspondiente inventario, lo cierto es que, ello, efectivamente no aparece sustentado por ningún medio probatorio que resultase idóneo para esos fines. Sencillamente se trató de prueba que resultó inconexa, la cual sucumbió a las conclusiones judiciales.

En este punto, lo que discute la defensa es una falla en el razonamiento lógico usado por el Tribunal y que se vincula con el principio de la razón suficiente y el de no contradicción, sin embargo, en su exposición tan solo existe un



desacuerdo con la valoración probatoria efectuada, siendo sus postulados solo un repaso de lo que ya se ponderó, de tal manera que no existió ninguna infracción de los principios de la lógica, observando solo un apego al principio de la razón suficiente, entendido éste como aquel en que una premisa es suficiente cuando se basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. Así, este principio se asocia al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales – artículo 36 de Código Procesal Penal – y, en este caso, el tribunal del grado entrega fundamentos en torno a sus conclusiones, las que descansan en probanzas ciertas que conducen a las conclusiones arribadas, ello en pleno respeto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Así las cosas, en las condiciones precisadas, el recurso incoado por la defensa no podrá prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 374 y 384 del Código Procesal Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los condenados Joshua Adolfo Salgado Salgado y Juan Enrique Hormazabal Puentes, enderezados contra la sentencia de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veinticuatro y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes RIT 30-2024, RUC 2.301.050.043-5 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, los que, en consecuencia, no son nulos.



II. Que, sin perjuicio de lo anterior, advirtiéndose un error de referencia en el punto resolutivo III de la sentencia que se revisa, en cuanto se indica que, la pena corporal aplicada a los sentenciados por el delito de tráfico de armas, cinco años y un día, se encuentra en el tramo máximo del presidio mayor, cuestión que resulta incorrecta conforme al artículo 56 del Código Penal, se rectifica el fallo dictado por Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en su Rol Interno 30-2024, específicamente en el numerando resolutivo III, sustituyendo en este, donde dice “PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MAXIMO”, por la frase “PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO”; debiendo regir en lo demás lo allí resuelto.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier

Rol N° 51.335-2024





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavolari G. Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dos de diciembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

